



Resolución de Superintendencia

N° 1222 -2017-SUCAMEC

Lima, 15 NOV 2017

VISTOS: El Recurso de Apelación interpuesto el 04 de octubre de 2017, por el señor Juan Humberto Vásquez Laguna contra la Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 28 de agosto de 2017; el Memorando N° 3700-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 16 de octubre de 2017, de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos; el Dictamen Legal N° 732-2017-SUCAMEC-OGAJ de fecha 15 de noviembre de 2017, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en sus funciones;

Que, el literal t) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional, resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra actos administrativos emitidos por sus órganos de línea y órganos desconcentrados;

Que, la facultad de contradicción contemplada en el numeral 215.1, artículo 215, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que frente a un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un derecho e interés legítimo recurrido por parte de los administrados procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; asimismo, el numeral 216.1, del artículo 216, establece que los recursos administrativos son: Recurso de Reconsideración y Recurso de Apelación, y el numeral 216.2, dispone que el plazo para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días;

Que, el artículo 218 del referido cuerpo legal, dispone que: *“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas ofrecidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho [...]”*;

Que, a través de los Expedientes N°s 201700225766 y 201700225765 de fecha 17 de mayo de 2017, el señor Juan Humberto Vásquez Laguna (en adelante, el administrado) solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC), la regularización de la Licencia de posesión y uso N° 301811 y emisión de Tarjeta de propiedad de su arma de fuego;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 28 de agosto de 2017, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (en adelante, GAMAC) desestimó la solicitud presentada por el administrado, toda vez que no ha cumplido con la condición necesaria para la renovación solicitada, conforme señala el literal b), artículo 7, de la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil así como el numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299. Asimismo, dispuso la cancelación de la Licencia de posesión y uso N° 301811 correspondiente al arma de fuego con serie N° 816466;



VºBº
El Paz



VºBº
Verástegui

Que, con fecha 04 de octubre de 2017, el administrado interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC, a fin de que se revoque la misma y se declare fundada su solicitud de regularización de Licencia de uso y Tarjeta de Propiedad de su arma de fuego, argumentando principalmente que la resolución gerencial impugnada carece de razonamiento lógico jurídico por cuanto si bien es cierto registra una condena, dicha sentencia se ha debido a un delito de función es decir por el presunto delito de prevaricato en su calidad de Juez, ya que dicho delito se había cometido en atención a sus funciones jurisdiccionales. Asimismo, esgrime una "presunta vulneración de sus derechos fundamentales", al haberse aplicado en su caso, el artículo 7 de la Ley N° 30299 y del Reglamento de la citada Ley, la cual considera como una restricción inconstitucional, atentatoria contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por último, alude que son múltiples los derechos constitucionales que se ha violado en su caso, como el derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la motivación y el derecho a no ser privado del derecho de defensa, por lo que debe ordenarse la restitución de sus derechos a la situación que existía previo a la emisión del acto que se impugna;

Que, por intermedio del Memorando N° 3700-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 16 de octubre de 2017, la GAMAC remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica, el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC;

Que, la expresión del "debido proceso" en sede administrativa se sustenta en el principio del Debido Procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que prescribe: "Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten [...]";

Que, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil, en el literal b) de su artículo 7, establece que para obtener y renovar las licencias o autorizaciones otorgadas conforme a la citada Ley, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas deben cumplir, entre otras, con la siguiente condición: "b) No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena";

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, establece como condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones: "No contar con antecedente penal por delito doloso se refiere a que el solicitante de una autorización o licencia ante la SUCAMEC, **no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos.** Conforme lo dispone el literal b) del artículo 7 de la Ley, la rehabilitación regulada por los artículos 69 y 70 del Código Penal no resulta aplicable para la evaluación y consultas a cargo de la SUCAMEC" (Resaltado y subrayado agregado);

Que, en forma preliminar, se advierte que la solicitud presentada por el administrado, se encuentra enmarcada en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30299, referente al Procedimiento de regularización de licencias vencidas, para los usuarios que a la entrada en vigencia de la Ley tengan su licencia o licencias vencidas puedan realizar el canje automático de las mismas por la Licencia única y puedan obtener la respectiva Tarjeta de propiedad. Además, precisa que la Licencia de posesión y uso de arma de fuego N° 301811 (actualmente caducada), fue evaluada y otorgada al amparo de la Ley N° 25054 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-98-IN;



C. Verástegui



Resolución de Superintendencia

Que, asimismo, indica que la solicitud presentada por el administrado, fue ingresada a trámite a través de los N°s 201700225766 y 201700225765 de fecha 17 de mayo de 2017, registrando como marco legal para su aprobación, la Ley N° 30299, vigente a partir del 06 de julio de 2016, la cual derogó la Ley N° 25054 y abrogó su Reglamento; por tanto, en aplicación del Principio de Temporalidad de las Leyes, previsto en el artículo 103 de nuestra Constitución, se debe utilizar la Ley N° 30299 y su Reglamento, toda vez que las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes se registran durante la vigencia de Ley N° 30299;

Que, a su vez, señala que el numeral 22.6, artículo 22, de la Ley N° 30299, establece que la SUCAMEC en el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización o sanción, dispondrá la cancelación o suspensión de licencias de uso de armas de fuego, por cualquiera de las siguientes causales sobrevinientes a su otorgamiento: 1) Por infracciones a la presente Ley y el reglamento; **2) Incumplir algunas de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la presente Ley;** y, 3) Cuando el titular de la licencia haga uso indebido del arma o afecte el orden interno, la seguridad ciudadana y personal, la propiedad pública o privada;

Que, en este contexto, luego de la verificación a la documentación contenida en el presente expediente administrativo, se observa en el Oficio N° 103584-2017-B-WEB-RNC-GSJR-GG emitido por el Jefe del Registro Nacional Judicial con fecha 22 de junio de 2017, que el administrado cuenta con antecedente en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por delito doloso, a raíz de la condena impuesta en su contra, por la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba de fecha 07 de noviembre de 2012 (Exp. 21-2012), por Delito – Fallo o dictamen ilegal (establecido en el artículo 418 del Código Penal), con una pena de cuatro (4) años;

Que, al determinarse que el administrado figuraba en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial, la solicitud presentada incumplió el literal b), artículo 7, de la Ley N° 30299 y el numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, los mismos que disponen como condición para la emisión y/o renovación de Licencias para portar armas de fuego bajo cualquier modalidad, que el solicitante no cuente con antecedente penal por delito doloso, es decir no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos, por consiguiente, no corresponde el otorgamiento de Tarjeta de propiedad del arma de fuego del administrado; en este sentido, la GAMAC declaró correctamente desestimada dicha solicitud, mediante Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 28 de agosto de 2017, en aplicación estricta del principio de Legalidad (numeral 1.1, del Artículo IV, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444), el cual refiere que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de sus facultades y fines conferidos;

Que, en cuanto a lo alegado por el administrado, referente a que *“la resolución gerencial impugnada carece de razonamiento lógico jurídico por cuanto si bien registra una condena en su contra, dicha sentencia se ha debido a un delito de función, es decir por el presunto delito de prevaricato en su calidad de Juez, ya que dicho delito se había cometido en atención a sus funciones jurisdiccionales”*; cabe indicar que dicho alegato carece de fundamento, puesto que el “Delito por fallo o dictamen ilegal”, estipulado en el artículo 418 del Código Penal, es un delito doloso, toda vez que la conducta delictiva se realiza cuando la persona (funcionario público o autoridad) encargada del sigilo y seguridad de la información obtenida para la Administración Pública, conociendo los elementos objetivos del hecho típico (conducta omisiva) acepta su realización (aprovechamiento para sí o para un tercero del secreto o la información privilegiada que custodia);

Que, en adición a ello, debemos señalar que si bien es cierto toda persona condenada luego de cumplir sentencia condenatoria en su contra, se le devuelven sus derechos suspendidos o restringidos, también es cierto que la figura del cumplimiento de condena conocida como “rehabilitación” (regulada en los artículos 69 y 70 del Código Penal), la cual dispone que luego de cumplida la sentencia condenatoria en su contra se le devuelven al condenado sus derechos



VºBº
E Paz



VºBº
C Verástegui

suspendidos o restringidos por dicha condena, no exime a la SUCAMEC de proceder con la cancelación de la Licencia de posesión y uso de arma de fuego N° 301811, conforme a la potestad de sanción estipulada en el literal b), numeral 22.6, artículo 22, de la Ley N° 30299, toda vez que se evidencia en el Oficio N° 103584-2017-B-WEB-RNC-GSJR-GG, que el administrado incumple la condición establecida en el literal b), artículo 7, de la Ley N° 30299 y en el numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299;

Que, con respecto a la “presunta vulneración de sus derechos fundamentales”, al haberse aplicado en su caso, el artículo 7 de la Ley N° 30299 y del Reglamento de la citada Ley, la cual considera como una restricción inconstitucional, atentatoria contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad; conviene precisar que sobre la base de los argumentos previamente expuestos, se colige que la aplicación estricta de la condición establecida en el literal b), artículo 7, de la Ley N° 30299 así como del numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, en el presente caso, no vulnera ningún derecho o garantía establecida en nuestra Constitución Política, así como tampoco contraviene los principios del procedimiento administrativo contenidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444;

Que, no obstante lo señalado, cabe agregar que en aplicación del Principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4, artículo IV, Título Preliminar, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la Autoridad Administrativa (en este caso, la SUCAMEC) cuenta con la obligación y la prerrogativa para que sus decisiones se adapten dentro de los límites de las facultades atribuidas siempre que mantenga la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar; en este sentido, teniendo en cuenta que los hechos pasibles de sanción son irrefutables (registro histórico de sentencia condenatoria impuesta por la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba de fecha 07 de noviembre de 2012), basta la verificación del mismo para que se imponga la medida administrativa previamente establecida en el numeral 22.6, artículo 22, de la Ley N° 30299;

Que, en relación al argumento referido a que “*son múltiples los derechos constitucionales que se ha violado en su caso, como el derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la motivación y a no ser privado del derecho de defensa, por lo que debe ordenarse la restitución de sus derechos a la situación que existía previo a la emisión del acto que se impugna*”; al respecto, resulta necesario indicar que la Constitución es la primera de las normas del ordenamiento jurídico peruano y define el sistema de fuentes formales, en tanto la Ley (en este particular, la Ley N° 30299 y su Reglamento) debe ser acorde con nuestra norma fundamental y sus principios; sin embargo, una vez que la Ley se encuentra vigente, toda actuación decisoria de la Administración se encuentra inexorablemente sujeta a ella (en aplicación del principio de Legalidad), por lo que no puede dejarse de aplicar la Ley o pronunciarse en sentido contrario a ella (con tan solo interpretar que la misma es inconstitucional o su aplicación limita un derecho fundamental o garantía constitucional), toda vez que la Autoridad Administrativa se encuentra obligada a ejecutarla y cumplirla; por tanto, lo alegado en este extremo del recurso interpuesto, se trata de una afirmación inexacta y equívoca;

Que, estando a lo expuesto en el Dictamen Legal N° 732-2017-SUCAMEC-OGAJ, corresponde declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC;

Que, finalmente, conforme establece el numeral 6.2, artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el precitado dictamen debe ser notificado en forma conjunta con el acto administrativo que resuelve el presente recurso;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Gerente General;



VºBº
C. Verástegui



Resolución de Superintendencia

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Juan Humberto Vásquez Laguna contra la Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 28 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, dándose por agotada la vía administrativa.

Artículo 2°.- Disponer que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos cumpla con lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto de la Resolución de Gerencia N° 3384-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 28 de agosto de 2017.

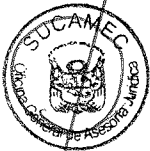
Artículo 3°.- Publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Artículo 4°.- Notificar la presente resolución al interesado así como el Dictamen Legal N° 732-2017-SUCAMEC-OGAJ, y poner de conocimiento de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.


RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL

Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC



VºBº
C. Verástegui



VºBº
E. Pez